



El petróleo y las urnas. Evolución del Estado en Guinea Ecuatorial

En agosto de 2007, durante un viaje por el interior de Guinea Ecuatorial, fui a visitar a un antiguo amigo a la ciudad de Mongomo. Nos habíamos conocido tres años antes en la capital, Malabo. Él era un activo miembro de una asociación de jóvenes con la cual yo había colaborado en uno de sus proyectos. Ahora, la asociación no existía y él y sus compañeros de singladura ocupaban cargos de índole importante dentro de la administración estatal, en el ámbito de la jurisprudencia.

Intercambiando puntos de vista acerca de la situación del país, él argumentaba que en la actualidad, a diferencia de cuando nos habíamos conocido, la República de Guinea Ecuatorial estaba asentando, a base de un arduo trabajo y de los beneficios generados por el petróleo, un auténtico Estado de derecho. Cuando puse en duda su afirmación, contrargumentando que desde mi punto de vista la arbitrariedad del Estado todavía era muy palpable, él afirmó que el principal culpable de esta situación era la población ecuatoguineana que se mostraba pasiva ante cualquier injusticia que le rodease y dejaba espacio para que algunos militares y funcionarios mantuvieran pautas de comportamiento corruptas. Concluyó, al mismo tiempo, que esta subyugación todavía era fruto de los años de dominación colonial española y que era la madurez de la propia sociedad quien terminaría con esta situación.

Si estas afirmaciones fueran ciertas, parcial o totalmente, las elecciones legislativas y municipales del 4 de mayo de 2008 no hubieran dejado un resultado tan escandalosamente irreal. De los 100 diputados en juego, 99 irán a manos de la coalición gubernamental liderada por el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, y al presidente Teodoro Obiang Ngema, que controlará, como hace desde 1979, el poder de este pequeño Estado del África Central. El fraude vuelve a aparecer como el principal protagonista de la contienda electoral demostrando que el Estado de derecho es todavía una utopía.

El objetivo de este artículo es reflexionar, a partir de la contienda electoral, sobre el funcionamiento actual del Estado ecuatoguineano, analizando sus actores inter-

nos y externos, su evolución en los últimos años y las dinámicas y potencialidades de cambio que presentan ciertas iniciativas para el país.

■ La celebración de las elecciones

Las elecciones de 2008 se presentaban para algunos observadores como una gran oportunidad para «consolidar» el proceso de democratización del país, que se había iniciado formalmente en 1991 con la proclamación de una Constitución que reconocía el multipartidismo. Las voces más optimistas, principalmente, procedían de dos núcleos.

Por una parte, algunos partidos aceptados como oposición reconocían que sus actividades políticas habían ganado peso fruto del mayor espacio de actuación que el régimen les otorgaba.¹ Los partidos que aspiraban a obtener representación política eran tres: Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Unión Popular (UP) y Acción Popular de Guinea Ecuatorial (APGE). La otra versión era la de la embajada estadounidense y la del Gobierno español que, con su ayuda técnica, creían haber asentado las bases para la celebración de unas elecciones libres y justas.

Muchas dudas se resolvieron ya durante la misma convocatoria electoral (realizada antes de que terminase la elaboración del censo) y denunciada constantemente por algunos partidos de la oposición, acusando al Gobierno de boicotear a través de la intimidación militar o de grupos afines al régimen los actos de campaña de sus respectivos partidos, sobre todo en el interior del país.

Sin embargo, la jornada electoral fue el momento menos diáfano en todo el proceso. Desde las primeras horas de la mañana, los partidos de la oposición fueron testimonio de grandes irregularidades, la mayoría de ellas muy conocidas en el contexto guineano. Es el caso, por ejemplo, del voto público, acción de mostrar la papeleta antes de depositarla en la urna normalmente ante la coacción de un miembro de la mesa electoral o de un militar. También se registraron otras irregularidades, como la ausencia de papeletas de los partidos de la oposición en distintos colegios electorales, la realización del voto transeúnte (votantes no presentes en el censo) o el voto delegado, donde un jefe del poblado ejercía el voto de sus conciudadanos. Muchas mesas electorales estaban presididas por miembros del Gobierno o del PDGE, contraviniendo las leyes electorales, mientras que los interventores del CPDS, UP y APGE recibieron constantes amenazas y algunos fueron detenidos arbitrariamente para que no pudieran ejercer su función.

El recuento de votos también fue polémico, porque el CPDS, aún no reconociendo el recuento de votos, afirmó que el reparto de escaños, según los votos recibidos

por su partido, fue erróneo. Otras reacciones arbitrarias fueron anular listas de la oposición en distintas poblaciones por estar incompletas, cuando muchas de las listas del PDG tampoco lo estaban. Por todo ello, el CPDS, al cual se le otorga el único escaño, ha impugnado los resultados a la Junta Electoral Nacional, aunque sabe que ésta tiene muchos números de ser desestimada.

La inverosimilitud de los resultados tampoco permite calibrar cuáles son los apoyos reales de la sociedad guineana al régimen. Aunque es cierto que existen presiones constantes para que la población apoye públicamente al régimen (camisetas del PDGE, pósteres del presidente, asistencia obligada a las celebraciones nacionales, etc.), sería poco riguroso declarar que la mayoría de la población está en contra del actual presidente.

A nivel internacional, las reacciones sobre el proceso electoral fueron muy limitadas. Aunque es cierto que el Gobierno guineano impidió que periodistas extranjeros, sobre todo españoles, hicieran una cobertura normal de los últimos días de campaña y de la jornada electoral, una representación del Parlamento español, formada por un diputado del PSOE, otro del PP y otro de CiU estuvo invitada como observadora. Su viaje fue relámpago, y la misma noche del 4 de mayo volvía a Madrid. Evidentemente, los márgenes de movimiento de esta delegación fueron limitados y sus visitas se centraron en colegios electorales con un funcionamiento aceptable, pero durante todo el día recibieron las quejas de los partidos de la oposición que denunciaban desesperadamente las múltiples actividades de fraude. Sin embargo, la declaración firmada por los tres parlamentarios fue inequívoca al afirmar que la jornada electoral había significado un nuevo avance para la democratización del país.²

Desde Madrid, las declaraciones acerca del resultado electoral fueron matizadas. Desde la Plataforma de Apoyo para la Democracia en Guinea Ecuatorial no solo se denunciaba lo ocurrido sino que se instaba al Gobierno español a no reconocer los resultados.³ Sin embargo, ni el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ni el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, hicieron nada al respecto.

■ Los pilares del poder y formas de gobierno

Para entender con un poco más de profundidad lo ocurrido en Guinea Ecuatorial es necesario establecer cuáles son los actores que juegan un papel importante en la vida política de este país. La literatura africanista ha presentado este Estado como uno de los mejores ejemplos de nepatrimonialismo. Este sistema político, tan enraizado en otros estados africanos, debe sus raíces al periodo colonial (despotismo y arbitrariedad) y a las estructuras sociales africanas (vínculos verticales), y entiende al

Estado como una estructura política dominada por lógicas clientelares y de patronazgo, con una preponderancia de las relaciones familiares. La esfera pública, privada y familiar quedan entremezcladas propiciando una sensación de caos político que algunos autores han catalogado como instrumentalización política del desorden.⁴

El Estado está controlado, a través de distintas esferas de poder, por el clan esangui de la ciudad de Mongomo de la etnia mayoritaria fang. Además de familiar, otras características atribuidas en los últimos años al Estado ecuatoguineano son la preponderancia, debido a que domina cualquier faceta de la vida pública; el autoritarismo, con un nulo respeto a las leyes establecidas, y la violencia, marcada por el protagonismo de la clase militar y los constantes abusos a los derechos humanos.⁵

El papel de la oposición política también ha sido cuestionado, debido a que el régimen ha prohibido o cooptado gran parte de la oposición. La que se mantiene firme dispone de un margen de acción muy limitado y su participación en la arena política ha despertado las críticas de sectores exiliados que denuncian que presentarse a las elecciones es legitimar el poder del PDGE. En estos últimos cuatro años, el único partido con representación parlamentaria (dos diputados), ha sido el CPDS que, aún sabiendo los límites de su capacidad de modificación del estatus quo, ha preferido participar en el exiguo espacio político que le deja el régimen para denunciar constantemente las incongruencias del funcionamiento del Gobierno. Otras formaciones políticas que aspiraban a seguir el modelo del CPDS eran UP, que después de su último congreso consiguió arrinconar las facciones pro-régimen que amenazaban con la cooptación, y APGE, que nace de una escisión del Partido del Progreso (PP).

Existen multitud de formaciones políticas, muchas de ellas ilegalizadas y que centran su exigua actividad desde el exterior, normalmente en España, donde se encuentra por un lado el Partido del Progreso (PP), que en 2003 organizó un gobierno en el exilio, y la coalición Demócratas por el Cambio (Decam), liderada por el profesor y escritor bubi Justo Bolekia Boleká. La iniciativa del PP ha sido constantemente deslegitimada por muchos de sus compatriotas, por su alto grado de elitismo y por estar liderado por su controvertido líder, Severo Moto, acusado por el régimen de orquestar distintos intentos de golpe de Estado y actualmente condenado a prisión por la justicia española por tráfico de armas, hecho por el cual el escritor Donato Ndong Bidyogo ha señalado que se está convirtiendo en un mártir de la causa guineana.⁶

Pero los cimientos del poder del actual Gobierno se establecen de una forma más directa con sus relaciones externas y los recursos naturales, la extraversión de su sistema político y económico. Actualmente, Guinea Ecuatorial, con apenas medio millón de habitantes, es el tercer productor de petróleo africano después de Angola y

Nigeria. El descubrimiento del crudo es bastante reciente ya que las primeras prospecciones exitosas se realizaron a principios de la década de 1990, aunque las primeras extracciones no empezaron hasta 1995.

La progresión de la producción ha sido meteórica y actualmente se sitúa cerca del medio millón de barriles diarios. La totalidad de la producción es exportada porque el país no dispone de industria propia, y el 98% de la riqueza nacional se basa en la venta de este producto.

Los efectos del *boom* del petróleo son evidentes y el PIB per cápita se sitúa a niveles europeos. La gran mayoría de los hidrocarburos (petróleo y gas) son explotados por empresas estadounidenses, aunque progresivamente han ido apareciendo, al igual que en toda África Central, CNOOC (China), Petronás (Malasia) y Gazprom (Rusia).

De este modo, las relaciones diplomáticas del Estado guineano con las principales potencias mundiales son exquisitas y representan la base del mantenimiento del régimen actual. Si las reformas políticas que se introdujeron en 1991 fueron una respuesta a las amenazas de los donantes que exigían una progresiva democratización de los estados una vez terminada la contienda bipolar, hoy en día quien marca los cambios en la política guineana es el propio Gobierno, que exige de los estados-clientes ora que legitimen tímidas reformas como grandes cambios, ora que no se pronuncien ante situaciones de dudosa legalidad como las actuales elecciones o la situación de los derechos humanos.

Podemos ejemplificar esta situación con algunos casos. El primero sería el papel del Gobierno estadounidense que, a través de su embajada en Malabo, actúa de amplificador de las bondades del régimen a cambio de mantener una relación preferencial con las empresas de capital estadounidense. Esta embajada se reabrió, a petición del *lobby* petrolero norteamericano, justamente el año 2002, después de que cerrara en 1995 como protesta por la grave situación de los derechos humanos en el país. El esfuerzo valía la pena porque distintos estudios revelaban que el porcentaje de beneficio para las multinacionales estadounidenses en las explotaciones guineanas era de las más grandes de todo el mundo, oscilando entre el 70 y el 85%.⁷

Curiosamente, los informes actuales todavía mantienen un tono crítico, pero con un enfoque muy distinto. La situación de los derechos humanos, según se desprende de los informes del departamento de Estado norteamericano, es un problema que no mantiene relación con el sistema político y que puede ser revertida a través de los distintos programas de cooperación que se están realizando, muchos de ellos financiados por las propias empresas.⁸

Lejos de ser una casualidad, es importante resaltar que el Gobierno guineano, además de tener una representación diplomática en Washington, recientemente ha abierto un consulado en la ciudad de Houston (Texas), sede principal de Exxon Mobile.⁹

El segundo ejemplo serían las exquisitas relaciones que el Gobierno guineano mantiene con China. Su sed de importar petróleo ha propiciado el establecimiento de una relación bilateral por la cual el Gobierno chino ofrece la construcción de grandes infraestructuras para el país (carreteras, aeropuertos, puertos, red eléctrica, etc.) a cambio de petróleo. Las ventajas para el Gobierno guineano son notorias, pues no dispone de ninguna empresa ni pública ni mixta para gestionar tales construcciones, muchas de las cuales, a su vez, se orientan para servir las necesidades de la propia industria petrolera (la planta hidroeléctrica de Malabo o el puerto de Luba) o fortalecer, como es el caso de la construcción del edificio de la radiotelevisión, el poder y el control del propio Gobierno. Además, el modelo de relación con China viene de la mano de un nulo cuestionamiento político, una condonación sustancial de la deuda bilateral, y la venta de armamento y asesoramiento militar.¹⁰

Las relaciones del Gobierno con Francia también son estrechas. Aunque la participación francesa en el sector de los hidrocarburos se reduce a la comercialización del petróleo (la mayoría de las gasolineras son Total), los capitales franceses son visibles en el sector de las telecomunicaciones y ostentan el 40% de la Sociedad Anónima de telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial. También hay que recordar que el país está dentro de la zona del franco CFA y mantiene estrechos lazos con la francofonía.

El Gobierno guineano ha podido mantener sin excesivos problemas la estructura patrimonial gracias a la extroversión de su economía y a los grandes beneficios que le ha aportado el petróleo. No necesita fuentes alternativas para mantener su privilegiada posición y esto se demuestra con la nula capacidad (y voluntad) impositiva. Sin duda, esto hace que gran parte de la población, tanto rural como urbana actúe, laboralmente en un sector no regulado (economía no formal) en unas condiciones altamente dificultosas.

■ Diplomacia e intereses económicos: España en Guinea

La relación entre España y Guinea Ecuatorial, desde la independencia de ésta última en 1968, ha ido de la mano de la tensión política. El primer presidente, Macías Ngema, no fue el escogido por el Gobierno franquista que, de este modo, perdió el proceso de independencia pactada que tan buenos resultados ofreció para franceses y británicos. Macías Ngema expulsó a los pocos empresarios españoles que deci-

dieron quedarse en el país, decomisó sus propiedades y buscó apoyo en el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética.¹¹

Con la llegada *manu militari* al poder de su sobrino Teodoro Obiang Ngema en 1979, el Gobierno guineano giró la mirada hacia las potencias capitalistas y buscó recuperar las relaciones con la antigua metrópoli en aras de establecer algún tipo de cooperación financiera que sacara al país de la pésima situación en la que se encontraba. Sin embargo, la recuperación de las relaciones se vio supeditada a la oportunidad de acercarse, con Marruecos como interlocutor, a la francofonía y entrar en la zona de franco CFA.

En el campo económico, es importante resaltar que las primeras prospecciones petroleras fueron realizadas por la española Hispanoil y la francesa Elf. Al no prosperar, éstas dejaron el campo abierto a las intervenciones de las empresas norteamericanas, que surtieron efecto a mediados de la década de 1990. De este modo, Guinea Ecuatorial se convertía en un socio preferencial de los Estados Unidos. España perdía todo peso económico, y más aún con las buenas relaciones del Gobierno español con la Administración norteamericana durante el período de José María Aznar (1996-2004) que alejaron cualquier idea de disputar la hegemonía estadounidense en el país.

En el campo político, España ha sido tradicionalmente el país donde se han establecido los exiliados políticos guineanos. Como ya hemos comentado, existen numerosas fuerzas políticas y plataformas de apoyo a un cambio de régimen. Estas iniciativas han intentado utilizar el Gobierno español como amplificador de sus voces. Sin embargo, la presión que se ha hecho desde Madrid ha sido muy tímida, principalmente por la falta de coherencia entre los dos principales partidos españoles (PP, PSOE), que siempre han mostrado la voluntad de favorecer a uno de los partidos de la oposición (PP, CPDS); y, en segundo lugar, por la falta de herramientas de que ha dispuesto y la poca relevancia que ha tenido la cuestión política de Guinea Ecuatorial en los grandes foros políticos.

Sin embargo, existen elementos de cambio, aunque no positivos precisamente. Si bien los campos de acción del capital económico en Guinea Ecuatorial siguen siendo limitados, actualmente existe un interés creciente por parte de Repsol para explorar nuevos pozos petroleros. Recientemente, su director de Responsabilidad Social Corporativa ha afirmado la participación de Repsol en una exploración cuyos resultados están por confirmar.¹² También Unión Fenosa ha sido seleccionada para participar, juntamente con la compañía nacional Sonagás en la construcción de un gran proyecto energético en el golfo de Guinea que contará con una planta de licuefacción y gaseoductos que unirán las plataformas guineanas con los países limítrofes.¹³

Asimismo, una delegación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona realizó el mes de mayo de 2008 una estancia en el país con el objetivo de «analizar las oportunidades económicas y los factores competitivos del área de Malabo y Bata, establecer relaciones empresariales, realizar transacciones comerciales con empresas locales y promover nuestra región para atraer negocios e inversiones internacionales». ¹⁴

Todas estas estrategias del capital privado quedan auspiciadas en la política exterior española. El propio Plan África reconoce que uno de los siete grandes objetivos es «el refuerzo y la diversificación de los intercambios económicos, así como el fomento de las inversiones, sin olvidar la creciente importancia estratégica de la región subsahariana, y en particular el Golfo de Guinea, para nuestra seguridad energética y las oportunidades de negocio en el sector de hidrocarburos para las empresas españolas». ¹⁵

Las consecuencias políticas de esta nueva estrategia se han podido ver claramente. Del distanciamiento y hostilidad de los primeros años de la década actual, a una cada vez mayor colaboración entre ambos gobiernos. Uno de los puntos culminantes de esta relación fueron las distintas visitas de representantes del Gobierno y empresas españolas a Guinea a lo largo del año 2006 y la posterior visita del presidente guineano a Madrid en noviembre de 2006. Aunque a excepción del PSOE, todos los partidos políticos protestaron por la visita e impidieron la presencia del mandatario en el Congreso de los Diputados, la oposición guineana pudo observar el giro copernicano de la política española a favor de los intereses empresariales.

Para maquillar esta estrategia de acercamiento político a un régimen tan insalubre, la maquinaria de cooperación al desarrollo no ha parado de funcionar. El propio Plan África, que establece Guinea Ecuatorial como área prioritaria, asume la necesidad de fortalecer la cooperación, con una fuerte asignación económica destinada a proyectos asistenciales en el campo de la educación, la sanidad, y el fortalecimiento institucional. Algunos especialistas han valorado que la estrategia de cooperación española en Guinea Ecuatorial es solo un intento de ocultar los intereses económicos del sector privado, mientras que otros anuncian que Obiang es el primer interesado en restablecer las inversiones de españoles, con las cuales moderará aún más las posibles críticas que puedan llegar desde España. ¹⁶

■ La maldición de los recursos naturales

Guinea Ecuatorial entra dentro de una serie de países a los cuales se ha considerado que su riqueza natural, lejos de mejorar la situación económica social y política del país, la ha empeorado.

A nivel social, la paradoja la muestran los propios macroindicadores. Guinea Ecuatorial es el país en el que existe una mayor distancia entre el puesto que ocupa dentro del PIB por cápita (30) y el Índice de Desarrollo Humano (127).¹⁷ Aunque los indicadores no son totalmente representativos del bienestar de una sociedad como la guineana, los resultados son incuestionables. Esto se debe a la nula redistribución de la rentas procedentes del petróleo y a la cada vez más marcada diferenciación social entre aquellos círculos que tienen acceso a los beneficios y los que se quedan al margen. Las infraestructuras sanitaria y educativa siguen siendo ínfimas.

También hay que destacar que, si bien el sector petrolero representa el 85% del PIB, la proporción de la población dedicada a esta industria no llega al 1%. Esto se debe a que la totalidad de la explotación es *offshore* (dentro del mar) y gestionada por empresas extranjeras que aún teniendo el compromiso de incorporar personal local, no generan grandes bolsas de trabajo, mientras que la participación de la empresa estatal Gepetrol es muy limitada. Lo que sí percibe la población guineana son los efectos de la *dutch disease* (enfermedad holandesa), que pone énfasis en las consecuencias negativas en los países que basan su economía en la actividad extractiva: inversión estatal en grandes infraestructuras al servicio de la propia industria, endeudamiento público (poco demostrable en el caso guineano) y, sobre todo, la inflación, que se deja especialmente notar en la capital.¹⁸

A nivel económico, también destacan los casos de corrupción masiva de las elites políticas. El más conocido, tal vez, fue el de las cuentas secretas descubiertas, durante el año 2004, en el Banco norteamericano Riggs, cuando el Senado de los Estados Unidos investigaba la desviación de fondos del ex presidente chileno Augusto Pinochet. El informe reconocía la existencia de pagos de las principales petroleras que operaban en Guinea Ecuatorial a cuentas secretas a nombre de «La República de Guinea Ecuatorial-Tesorería del Estado», familiares del presidente, embajadas, estudiantes y empresas fantasma.

La situación de los derechos humanos también continúa siendo muy problemática. Amnistía Internacional denuncia que aunque exista una ley aprobada en 2006 que prohíbe la tortura, algunas detenciones arbitrarias siguen terminando en torturas en las dependencias policiales. Otro de los casos más denunciados por este informe son los desalojos forzados que se están produciendo en la capital y los incendios provocados en los barrios más humildes de la ciudad donde hay que construir nuevas viviendas sin ningún derecho para los antiguos inquilinos.¹⁹

El gran desarrollo infraestructural que está viviendo el país resulta cuestionable. En primer lugar, se está favoreciendo el sector de las comunicaciones (puertos, aeropuertos y carreteras), servicios muy poco utilizados por la gran mayoría de la po-

blación. Además de estar gestionadas por empresas chinas que utilizan mano de obra expatriada, destaca la presencia cada vez más importante de empresas árabes como *Arab Constructors*, presente también en otros países del África Oriental y que mantienen a la población local en una situación laboral indigna, con jornadas de más de 10 horas, 6 o hasta 7 días a la semana y sin ningún contrato.

■ El papel de la transparencia como estrategia de cambio

A diferencia de hace 4 o 5 años, actualmente el Gobierno guineano presume de sus rentas del petróleo y asegura su óptima gestión a favor de la población. En noviembre de 2007 se celebró a bombo y platillo la II Conferencia de Desarrollo Económico Nacional que, supuestamente, reunía a representantes tanto del Gobierno como de las empresas y de la sociedad civil con el objetivo de debatir acerca de las estrategias de desarrollo del país. En su discurso inaugural, el presidente afirmó, sin ningún tipo de tapujo, que «el Gobierno enfocará su atención en el desarrollo de la infraestructura social que será la envidia del continente y del mundo». ²⁰

Uno de los puntos tratados en esta conferencia fue el Plan para el Desarrollo Económico y Social, una iniciativa promovida por el Gobierno que propone de cara al 2020 diversificar la economía, invertir en seguridad, educación, infraestructuras y sanidad. En este mismo encuentro se habló de la antes mencionada enfermedad holandesa, pero no como una situación a corregir sino como una situación a evitar. Aunque los datos proporcionados por el PNUD apuntan a la regresión del IDH (del 120 en 2006 al 127 en 2008), el Gobierno sigue presumiendo de las bondades de su actual gestión de los recursos petroleros y una mejora de los servicios básicos poco visible en el día a día de la mayoría de la población.

Lejos de ser una ingenuidad, lo que está demostrando el Gobierno es una gran capacidad de articular discursos vacíos que contentan las pocas voces que pueden inquietar la continuidad del régimen patrimonial. El Gobierno defiende, a través de sus medios de comunicación, que el proceso que está viviendo el país es parecido al que Botsuana ha realizado con los beneficios de la explotación de diamantes.

La estrategia de silenciar las denuncias sobre el fraude electoral o la situación de los derechos humanos son respuestas cínicas pero con una gran dosis de sutileza. Obiang sabe que es más efectivo dejar las jergas al estilo Mugabe y optar por respuestas y acciones mucho más refinadas. Si España denunciaba la situación de los derechos humanos en 2005, una simple ley contra la tortura, que no puede ser bien supervisada por nadie, sirve para acallar momentáneamente gran parte de las críticas institucionales. Lo mismo pasa con los observadores electorales, que sin capaci-

dad de corroborar el fraude acaban legitimando, a través de ambiguas declaraciones, los resultados electorales.

El principal escollo (si no el único) que debe afrontar el Gobierno es la transparencia de los recursos petroleros. El movimiento a favor de la transparencia ha centrado su atención en los últimos años en situaciones de explotación de hidrocarburos y en países de perfil muy semejante al guineano. En 1999, la organización Global Witness publicó una investigación donde se desvelaba la complicidad entre las empresas petroleras y mineras y las partes combatientes en el conflicto de Angola.²¹ A partir de entonces empezaron a publicarse una serie de informes que denunciaban la relación corrupta entre multinacionales y gobiernos en países ricos en minerales e hidrocarburos pero con índices de pobreza muy altos o conflictos que parecían interminables.

Organizaciones como Internacional Transparency y Global Witness vienen denunciando la falta de transparencia entre las empresas extractivas y el Gobierno guineano. El caso de la Banca Riggs no es el único, pues múltiples informes han desvelado las fortunas que poseen los hijos de Obiang, en especial Teodorín, procedentes de las rentas del petróleo.²²

En el año 2002 aparece la campaña Publish What You Pay (Publiquen lo que pagan), formada por organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo con el objetivo de promover la transparencia en el pago, el recibo y la administración de los ingresos provenientes de las industrias del petróleo, gas y minería.²³ Dentro de las acciones promovidas por esta coalición están presionar a los gobiernos ricos en recursos naturales para que publiquen auditorías fiables e identificar cómo estos beneficios afectan a los presupuestos del Estado. Por otra parte, también existe la voluntad de presionar a los gobiernos del Norte para que éstos entiendan que una gestión transparente es una de las mejores herramientas de apoyo a las sociedades afectadas, y trabajar para establecer una reglamentación bursátil y bancaria que impida que la participación y el crédito llegue a empresas no transparentes.

Los impactos de los primeros estudios hicieron que el posicionamiento a favor de la transparencia ganara adeptos e importancia en los foros internacionales. La transparencia pasaba de herramienta contra la corrupción a condición básica para el desarrollo (erradicación de la pobreza) y la gobernabilidad (democracia) aceptada por la comunidad internacional. Este nuevo discurso implicaba un cambio de estrategia. Los nuevos objetivos reflejaban un mayor interés por los marcos legales que rodeaban el negocio petrolero, en detrimento de planteamientos de denuncia política.

En el mismo año 2002, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, el ex presidente británico Tony Blair lanzó la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias

Extractivas (EITI, en inglés). Esta iniciativa animaba a que, de forma voluntaria, empresas y gobiernos publicaran sus pagos y cobros a la vez que establecía que la sociedad civil de cada país debía participar en el proceso para validar los resultados.

La EITI, financiada por gobiernos del Norte y el Banco Mundial, establece la categoría de países candidatos –aquellos que se comprometen a iniciar la iniciativa– y países miembros –aquellos que han cumplido con todas las fases de publicación y validación de cuentas. Seis años después de su fundación, existen 23 países candidatos (16 de los cuales africanos) y ninguno es todavía miembro.²⁴

Guinea Ecuatorial es candidato desde sus inicios, pero en 2006 un informe publicado por *Revenue Watch* denunciaba ya que era uno de los siete países que todavía no había elaborado un plan de trabajo.²⁵ En vistas de las posibles críticas recibidas, el Gobierno decidió el 2007 realizar los primeros encuentros con la sociedad civil para establecer las prioridades. La retórica del Gobierno en torno a este proceso se revela muy activa, pero los pasos a seguir nos deben prevenir al respecto.

Uno de los puntos claves a seguir es el papel que jugará la sociedad civil y la oposición política en el proceso. No sería de extrañar que el Gobierno autolegitimara el proceso. La oposición política, dados los resultados electorales, tendrá una presencia irrisoria, mientras que el papel de la sociedad civil es un interrogante. No parece que existan por el momento muchas organizaciones guineanas con total libertad para obrar de observador directo en ese proceso. Por este motivo, los principales coordinadores de la EITI y la PWYP insisten en que una de las prioridades en Guinea Ecuatorial son los proyectos de creación y fortalecimiento de la sociedad civil (*advocacy*, en inglés).²⁶ Resulta paradójico, sin embargo, que las voces más optimistas sobre la instauración de la transparencia como motor de desarrollo desvinculen el hecho de fortalecer sociedad civil con el autoritarismo gubernamental y se gasten esfuerzos en indagar sobre las potencialidades de «crear» sociedad civil mientras los principales activistas guineanos siguen en el exilio.

El régimen de Obiang es demasiado fuerte y astuto como para no controlar el establecimiento de una sociedad civil precoz, cuando el propio concepto todavía es discutido por gran parte de los politólogos africanistas. Es, por eso, que las potencialidades de cambio a través del establecimiento de la transparencia de los beneficios de los hidrocarburos deben ser tomadas con mucha precaución.

■ Conclusiones

El presente artículo ha pretendido defender que la situación actual en Guinea Ecuatorial presenta algunos elementos de complejidad que deben ser abordados.

Las relaciones de extraversion, basadas en unas buenas relaciones diplomáticas gracias a la explotación del petróleo, mantienen al régimen en una cómoda posición que le permite seguir disfrutando de un sistema neopatrimonial.

Las nuevas dinámicas de presión han sido modificadas, siendo la transparencia de los beneficios del petróleo el eje de acción de la comunidad internacional. Sin embargo, el régimen de Obiang Ngema, lejos de rechazar las iniciativas y recomendaciones a favor de la transparencia, ha adoptado un discurso favorable que puede resultar muy engañoso por su nula eficacia hasta el momento y la injusta legitimidad que con su adopción se le atribuye. Esto le permite mantener viejas estrategias de control social (autoritarismo, violencia, fraude electoral) como ejes centrales de su actuación, y demuestra una gran capacidad para readaptarse a las nuevas y dóciles exigencias del sistema internacional. Una gestión transparente de los recursos petroleros no es sinónimo de bienestar social y menos de cambio político, y esta parece ser la lección que mejor ha aprendido el régimen guineano.

1. Entrevista a Avelino Mocache, secretario general de APGE, publicada en *El Periódico de Catalunya* el día 4 de mayo de 2008.
2. Los parlamentarios asistentes representaban al Grupo Socialista (Fátima Aburto), Partido Popular (Francesc Ricomá) y Convergència i Unió (Jordi Xuclá).
3. <http://www.asodegue.org/mayo14081.htm>
4. Chabal, P y Daloz, J.P.: *África Camina*. Ed Bellaterra, 2001.
5. Campos Serrano, A: «Nuevos recursos y viejas opresiones. Dinámicas políticas en Guinea Ecuatorial», *Nova África*, núm 14. 2004.
6. Ndongo Bidyogo, D.: «Mártires». *Mundo Negro*, núm 529, mayo de 2008.
7. International Monetary Fund Staff country report No. 99/113. *Equatorial Guinea: Recent Economic Developments*. Octubre 1993.
8. <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/7221.htm>
9. <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/7221.htm>
10. Marín Quemada, J.M.: *Guinea Ecuatorial: de la política económica a la política de hidrocarburos*, Boletín Real Instituto Elcano nº 94, 25 julio 2007.
11. Ruiz Miguel, C.: *El difícil acercamiento de España a Guinea Ecuatorial* ARI nº 18-2004, febrero de 2004.
12. Declaraciones de Eduardo García Montero, director de Responsabilidad Corporativa y Asuntos Institucionales de Repsol YPF en el Taller de Difusión sobre EITI, organizado en Madrid por la secretaría de Estado de Cooperación Internacional.
13. <http://www.salacomunicacion.unionfenosa.es/>
14. www.asodegue.org. Puede consultarse la convocatoria en www.clubexportadores.org
15. Resumen Ejecutivo del Plan África www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Home/planafrica.pdf

-
16. Velloso, A.: «El timo de la cooperación». *Revista Pueblos*, septiembre de 2007.
 17. PNUD, 2007 www.undp.org
 18. Campos Serrano, Alicia y Micó, Plácido: *Trabajo y Libertades Sindicales en Guinea Ecuatorial*. Fundación Paz y Solidaridad «Serafín Aliaga» – CCOO Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) Madrid, 2006.
 19. Guinea Ecuatorial, en el informe de Amnistía Internacional 2008. www.asodegue.org
 20. El discurso inaugural y la información acerca de la Conferencia pueden ser consultados en la página web del Gobierno www.espanol.guinea-equatorial.com
 21. Global Witness: *A Crude Awakening*. Londres, 1999. www.globalwitness.org
 22. Global Witness: *Tiempo para la Transparencia*, Londres, 2004.
 23. www.publishwhatyoupay.org
 24. www.eitransparency.org
 25. Revenue Watch Institute, *Eye on EITI*, EE UU, 2006.
 26. Esta visión fue ampliamente expuesta en el Taller sobre Transparencia celebrado en Madrid el 25 de mayo de 2008, defendida por Carlos Monge, miembro de la Junta de la EITI, y Tusantu Tongulalu, miembro de la organización EG Justice.